



GD-F-008 V.9

Página 1 de 17

## RESOLUCIÓN No. SSPD - 20154010003915 DEL 27/02/2015

### **“Por la cual se resuelve un recurso de reposición” EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 5° del Decreto 1484 de 2014 y en la Resolución No. SSPD 20111300032265 de 2011,

#### **CONSIDERANDO:**

#### **I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual “*se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones*”, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios de país.

Que el artículo 5° del Decreto 1484 de 2014, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que “*La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007.*”

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con el Decreto 1484 de 2014; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.), para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de CAPITANEJO, del departamento de SANTANDER, es de categoría 6 y como prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2013, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los el artículos 6° y 7° del Decreto 1484 de 2014.

Que contra la decisión de esta superintendencia sobre el proceso de certificación, procede únicamente el recurso de reposición, el cual debía ser interpuesto dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación del acto administrativo, tal como lo señala el artículo 76 del C.P.A.C.A.; recurso que se resuelve en éste acto administrativo.

#### **II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010052575, del 25 de noviembre de 2014, la SSPD decidió DESCERTIFICAR al municipio de CAPITANEJO, departamento de SANTANDER, por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 7° del Decreto 1484 de 2014:

a) Reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994 mediante:

1. Realizar Invitación pública dirigida a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de los servicios públicos (numeral 6.1 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994) y a otros



C014/5927



C014/5927

municipios, al Departamento, a la Nación y otras personas públicas o privadas, para organizar una empresa de servicios públicos (numeral 6.2 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994).

2. Acreditar documento en que conste que se realizó la publicación de las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 del artículo 6° de la Ley 142 de 1994.

3. Certificación en la que conste que no hubo empresas de servicios públicos o personas públicas o privadas interesadas en la prestación de los servicios ni en la organización de una empresa de servicios públicos en el municipio.

#### **2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010052575, del 25 de noviembre de 2014**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010052575, se envió citación al señor alcalde del municipio de CAPITANEJO, del departamento de SANTANDER, mediante el oficio No. SSPD 20144010745871, del 25 de noviembre de 2014, enviado por correo certificado el 2 de diciembre de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificaría la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

El señor ISIDORO MOGOLLÓN BLANCO, en su calidad de representante legal del municipio, se notificó personalmente el 19 de diciembre de 2014, del contenido Resolución No. SSPD 20144010052575.

Ahora bien, el señor ISIDORO MOGOLLÓN BLANCO, en su calidad de alcalde del municipio de CAPITANEJO, del departamento de SANTANDER, mediante documento radicado en esta entidad bajo los números SSPD 20155290005412, del 6 de enero de 2015, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010052575.

### **III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN**

El artículo 77 del C.P.A.C.A, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de CAPITANEJO, del departamento de SANTANDER, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, el escrito radicado con el No. SSPD 20155290005412, reúne los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto, se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

#### **3.2 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

#### **“ FUNDAMENTO DEL RECURSO**

*Tomando en consideración el Decreto 1484 del 2014, para la vigencia 2013, los Municipios a efectos de ser certificados para la administración de los recursos de Agua Potable y Saneamiento Básico debían dar cumplimiento a los requisitos generales establecidos en el artículo 6, dentro de los plazos establecidos en el artículo 9 de la misma normatividad; sin embargo de la revisión detallada del contenido de las dos normas es claro reitero que para la vigencia 2013, la obligación era dar cumplimiento a los requisitos del artículo 6, por cuanto para el cumplimiento del artículo 7, nada dijo la norma para dicha vigencia haciendo solo referencia en los plazos a la vigencia 2014, cuyo cumplimiento se debía dar el 30 de abril del 2015.*

*Lo anterior en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7, que reza:*

***“Artículo 7°. Requisitos adicionales para municipios y distritos que presten directamente los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. Salvo lo dispuesto en el parágrafo primero del presente artículo, para los municipios y distritos que tengan la calidad de prestadores directos se verificará cada dos años, el cumplimiento de los requisitos que se establecen a continuación, adicionales a los establecidos en el artículo 6° del presente Decreto: .....” (Negrilla y Cursiva fuera de Texto).***

Concordante con lo anterior el artículo 9, que determina los plazos indica:

Plazo para el cumplimiento de los requisitos del artículo 7

**Vigencia a Certificar:** 2014

**Año del proceso de Certificación por parte de la SSPD:** 2015

**Fecha Límite de Reporte:**

**FUT:** 15 de Abril de cada vigencia o en la fecha en que determino la Contaduría

**SUI:** 30 de Abril de 2015

Ahora bien, el artículo 7 del Decreto 1484 de 2014, en su Parágrafo Primero hizo una salvedad para aquellos Municipios que siendo prestadores directos se encuentren descertificados indicando que podrían obtener la certificación acreditando, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente decreto, el cumplimiento del aspecto o aspectos incumplidos.

En este punto específico es pertinente precisar que el Municipio con el propósito de atender los requerimientos de la Superintendencia por tercera vez realizo el agotamiento del procedimiento establecido en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, para este último proceso la Superintendencia no se pronuncia sobre las invitaciones, la censura jurídica está enfocada a la competencia para realizar las invitaciones indicando que ella estaba radicada en el despacho del Gobernador y no del Alcalde, por cuanto el Municipio estaba descertificado, igualmente el hecho de no realizar las invitaciones observado un orden cronológico; conforme a ello el problema jurídico a dilucidar es si el suscrito como Alcalde de Capitanejo tenía o no competencia para realizar las invitaciones y si el hecho de realizar las invitaciones de manera conjunta contraria al ordenamiento jurídico vigente, o no se cambia el objetivo establecido en la Ley.

Para hacer claridad respecto de los dos puntos precedentemente citados se debe precisar a la Superintendencia que para la fecha en que el Municipio de Capitanejo Santander, a través del suscrito como Representante Legal, realizo las invitaciones a efectos de dar cumplimiento al Artículo 6 de la Ley 142 de 1994, esto es el 22 de Mayo de 2014, no se encontraba descertificado aún más para el 1 de Septiembre de 2014 fecha límite para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1484 de 2014, el Municipio de Capitanejo, Santander, no estaba descertificado, ya que dicha situación jurídica solo se dio el 23 de julio fecha para la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios comunico la decisión de dejar sin efecto los Actos Administrativos emitidos, quedando en firme la decisión de Descertificar al Municipio para la vigencia 2012; así las cosas para la fecha, reitero de las invitaciones y del plazo limite establecido no había quedado en firme la decisión de descertificación y no existía certeza en este sentido pues nos encontramos a la espera de la decisión que adoptara el Organismo de Control respecto del recurso presentado con ocasión de la Acción de Tutela interpuesta y de la orden del Juez, es más para el 8 de Septiembre no 2014, la Superintendencia nos envió un oficio donde nos solicitaba un plazo para decidir sobre el recurso incoado, conforme a ello es claro que la competencia para adelantar el proceso de agotamiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994 estaba radicada en el Alcalde y no en el Gobernador, por cuanto solo si el Municipio estuviese descertificado antes del plazo establecido ahí si el Departamento se arrogaba fe Competencia, la anterior conclusión jurídica tomando en cuenta lo preceptuado en el artículo 7, Parágrafo Primero, del artículo 9 y el artículo 15 del Decreto 1484 de 2014.

Estas precisiones de manera general sin embargo a efectos de estructurar la defensa del Municipio y desvirtuar los argumentos esbozados desglosará los reparos jurídicos del Organismo de Control; y haremos alusión a cada uno de ellos en los siguientes términos:

**A.- QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PARÁGRAFO DEL ARTICULO 7 DEL DECRETO 1484 DE 2014, AL OSTENTAR LA CALIDAD DE PRESTADOR DIRECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, EL MUNICIPIO DEBÍA CUMPLIR CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1484 DE 2014, QUE INCUMPLIÓ EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA VIGENCIA 2012.**

Se hace necesario clarificar al Organismo de Control que el incumplimiento del artículo 7, conforme lo establece su Parágrafo Primero, no es por ser prestador directo, SI BIEN HACE ALUSION A DICHO ASPECTO LA SALVEDAD ES PARA AQUEL QUE SE ENCUENTRE DESCERTIFICADO POR UNO O VARIOS ASPECTOS DEL PRESENTE ARTICULO, en tal sentido dice la norma: El municipio o distrito prestador directo QUE SE ENCUENTRE DESCERTIFICADO por uno o varios de los aspectos del presente artículo, podrá obtener la certificación en la siguiente vigencia, acreditando, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 6 del presente decreto, el cumplimiento del aspecto o aspectos incumplidos, de acuerdo con los requisitos exigidos en la vigencia a certificar. Lo anterior, sin perjuicio de

la verificación que se realizará cada dos años de la totalidad de los requisitos para prestadores directos, fíjese que la salvedad es para aquellos que siendo prestadores directos se encuentren descertificados.

Como se manifestó anteriormente y se reitera para la fecha de las invitaciones y del plazo señalado para el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley para certificar los Entes Territoriales, el Municipio de Capitanejo, Santander no estaba DESCERTIFICADO, POR CUANTO NO ESTABA EN FIRME LA DECISION; en razón a que no se había resuelto por parte del superior el Recurso de Reposición presentado por El Municipio, así las cosas no estaba agotada la vía gubernativa y la decisión no se encontraba en firme, de acuerdo con ello no es viable jurídicamente que se indique que el Alcalde no era competente para adelantar el proceso, tampoco que se haga alusión a la salvedad establecida en el artículo 7 de Decreto 1484 de 2014 como argumento jurídico para descertificar al Municipio, el indicar que por esa razón el Alcalde no era competente para realizar las invitaciones, lo cual como queda evidenciado no es cierto, porque para el Ente Territorial que presido no se cumplían los requisitos exigidos en dicho artículo que determinaba que se debía dar cumplimiento a los requisitos adicionales del artículo 7, por parte de aquellos Municipios que además de ser prestadores directos hubiesen sido descertificados y Capitanejo si bien es prestador directo insisto para las dos fechas aludidas no había sido descertificado, en consecuencia al no darse dicha situación el Alcalde si era competente para adelantar el proceso y no el Gobernador.

**B. QUE EL MUNICIPIO REPORTO EN EL SUI LAS INVITACIONES, PUBLICACIONES Y ACTOS DE CIERRE PERO ES NECESARIO SEÑALAR: EL DECRETO NO. 0133 DEL 16 DE AGOSTO DE 2007, POR MEDIO DEL CUAL INVITO A LAS PERSONAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA ORGANIZAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS: ESTA INVITACIÓN NO SE DIRIGIÓ A LAS PERSONAS QUE ORDENA LA CITADA LEY EN EL NUMERAL 6.2 DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 142.**

LA RESOLUCIÓN NO. 087 DEL 22 DE MAYO DE 2014, POR MEDIO DE LA CUAL INVITO A PRESTAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO, SIN EMBARGO ESTA INVITACIÓN FUE REALIZADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL SIENDO COMPETENTE EL GOBERNADOR DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL DECRETO 1484 DE 2014.

En primer lugar hace referencia a la Resolución 087 del 22 de mayo de 2014, sobre la cual la Superintendencia hace dos reparos jurídicos concretos:

La invitación fue realizada por el Alcalde Municipal, siendo competente el competente el Gobernador de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1484 del 2014.

Que el Municipio no siguió el orden de las invitaciones es decir agotar primero la invitación dirigida a las empresas y después la relacionada con la organización que se encargue de la prestación de los servicios en el Municipio, en consecuencia se tiene como no cumplido este requisito.

A efectos de desvirtuar lo indicado por el Organismo de Control, se hace necesario precisar que el artículo 15 del Decreto 1484 del 2014, determina:

Artículo. 15 COMPETENCIA para asegurar la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los Habitantes del municipio o distrito DESCERTIFICADO. LOS DEPARTAMENTOS deberán asegurar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la jurisdicción de los municipios o distritos descertificados, para lo cual ejercerán las atribuciones específicas que a continuación se describen:

(...)

15.4 Respecto del municipio prestador directo de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo:

15.4.1 Adelantar lo previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, en caso de que no se haya agotado. (Negrilla y Cursiva fuera de Texto).

La norma es clara la competencia queda radicada en el Departamento cuando el Municipio es descertificado, en tal sentido una vez se da esta situación jurídica entre otras atribuciones específicas para el Departamento representado legalmente por el Señor Gobernador se encuentra la de adelantar lo previsto en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, en caso de que no se haya agotado, sin embargo para el caso específico que nos ocupa el Gobernador de Santander no podía surtir esta actuación en razón a que no tenía la competencia por cuanto para la fecha de las invitaciones 22 de Mayo de 2014 y para el 1 Septiembre de 2014, fecha límite para el cumplimiento de requisitos, Capitanejo no estaba descertificado conforme a ello las invitaciones y el procedimiento desarrollado estuvo ajustado al Ordenamiento Jurídico Vigente; hasta tanto el Municipio no estuviera descertificado la competencia para realizar las y invitaciones estaba radicada en el suscrito como Alcalde Municipal, porque así lo determina el Decreto soporte del proceso.

En este aspecto considero necesario hacer alusión a la competencia, trayendo a colación la Sentencia de la Corte Constitucional que sobre el tema dijo:

*"La competencia de un funcionario es expresa:*

*Uno de los pilares del servicio público es el ejercicio reglado de competencias, es decir, una autoridad no puede hacer algo que la Constitución o la ley no le permitan. Ello es regla directa de la actual Constitución:*

*"Artículo 121 C.P., ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley"*

*También debe tenerse en cuenta el Inciso 1 del artículo siguiente:*

*"Inc. 1. Artículo 132, C.P.. - No habrá empleo que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento."*

*La jurisprudencia constitucional ha advertido desde, hace mucho tiempo que un funcionario solamente puede hacer lo que la ley le permite:*

*Las funciones que en un Estado de Derecho se desempeñan por los servidores públicos, son una actividad que en manera alguna puede ser arbitraria, ni dejarse librada al capricho del funcionario, sino que, siempre se trata de una actividad reglada, cuyo desempeño exige el sometimiento estricto a la Constitución, la ley o el reglamento," (Sentencia C-173/01, Corte Const.)*

*En Colombia entonces no es posible que un funcionario haga algo si no tiene habilitación expresa para hacerlo. Así lo formula la Corte Constitucional:*

*"...esta Corporación ha definido en el derecho fundamental al debido proceso, como la regulación jurídica que de manera previa limite los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los Individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados en la Constitución y la Ley" (Auto 072A de 2006, Corte Constitucional)*

*Es clara la jurisprudencia administrativa en el sentido de afirmar que la falta de competencia es causal por sí sola de ilegalidad del acto:*

*"Considera esta Sala imperioso precisar ahora que la legalidad, por falta de competencia, para proferir un determinado acto administrativo no se puede purgar a través del "privilegio de decisión previa", porque si bien éste supone la toma de decisiones por parte del Estado sin necesidad de contar con el consentimiento de los afectados o con la anuencia previa del Juez éstas sólo pueden ser adoptadas en ejercicio de una competencia establecida en la ley. Así, el privilegio de lo previo no constituye el fundamento de la competencia; por al contrario éste es un presupuesto necesario de aquél. De otra manera, se desconocerían los artículos 122 de la Constitución Política según el cual no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento- y 84 del C.C.A, en cuanto dispone que la acción de nulidad contra los actos administrativos pueden fundarse en el hecho de que los mismos hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes," (CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, Consejero ponente: ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ, Bogotá, D.C., abril catorce (14) de dos mil cinco (2005), Radicación número: 25000-23-26-000-1995- 01250-01(14583), Actor: INGESA INGENIEROS CIVILES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA., Demandado:FONDO ROTATORIO VIAL DISTRITAL – FOSOP).*

*Resulta alarmante que a pesar de la claridad meridiana de la jurisprudencia actual y de los textos constitucionales, existan autoridades públicas que insistan en ejercer funciones que no le corresponden, con el riesgo de verse sometidos a acciones o disciplinarias o incluso penales. Un caso relativamente frecuente es al cobro coactivo de cuotas pensionales de ex trabajadores por parte de entidades territoriales, siendo que cobro coactivo existe solamente para cobro de deudas a favor de la entidad, y esas cuotas pensionales son a favor de terceros, tal como consta en sentencia del Consejo de Estado de 2001, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: ROBERTO MEDINA LÓPEZ, Radicación número: 86001-00-00- 000- 1999 – 1375 -01 Demandado: MUNICIPIO DE MOCOYA, Actor: FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL PUTUMAYO). Se cita de la sentencia ..... "(Negrilla, Cursiva fuera de Texto).*

*De lo expuesto en la Sentencia aludida ha definido el derecho fundamental al debido proceso, como la regulación jurídica que de manera previa limita los poderes del Estado y establece las garantías de protección a los derechos de los individuos, de modo que ninguna de las actuaciones de las autoridades públicas dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentren sujetas a los procedimientos señalados*

en la Constitución y la Ley siendo precisamente este el principal argumento del Municipio en el presente recurso.

De la misma forma considero procedente hacer alusión a la Firmeza de los actos administrativos por considerar que ello ofrece claridad en la situación jurídica presentada y afianza los argumentos expuestos por el Municipio.

#### **FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS**

La fuerza ejecutoria del Acto Administrativo es entendida por la Corte Constitucional como:

"Fuerza ejecutoria del acto administrativo".

**LA FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTÁ CIRCUNSCRITA A LA FACULTAD QUE TIENE LA ADMINISTRACIÓN DE PRODUCIR LOS EFECTOS JURIDICOS DEL MISMO, AÚN EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE LOS ADMINISTRADOS. (Negrilla y Mayúscula fuera de Texto)**

El artículo 64 del Decreto 01 de 1.984, consagra:

" Salvo norma expresa en contrario los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por si mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados"

En esta forma, el acto administrativo tiene carácter ejecutorio, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicaciones o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir.

La fuerza ejecutoria de los actos administrativos, es decir, su ejecutividad, depende entonces de dos aspectos fundamentales: LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, SIEMPRE QUE NO HAYA SIDO DESVIRTUADA, y su firmeza, que se obtiene según el artículo 62 del Decreto 01 de 1984, cuando contra los actos administrativos no proceda ningún recurso, o no se interpongan recursos o se renuncie expresamente a ellos, o cuando haya lugar a la perención o se acepten los desistimientos. (Negrilla y Cursiva fuera del texto).

La firmeza del acto administrativo está contemplada en el artículo 87 de la Ley 1437 del 2011, al siguiente tenor:

**Artículo 87. Firmeza de los actos administrativos.** Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.
2. **DESDE EL DÍA SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN, COMUNICACIÓN O NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS.**
3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.
4. Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.
5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo." (Negrilla y Mayúscula fuera del texto).

La firmeza de un acto administrativo es un aspecto fundamental para que esta pueda estar ejecutado por la autoridad competente, dicha firmeza depende de una serie de circunstancias, por ejemplo que contra el acto no proceda recurso alguno, que si proceden recursos se hubieran resuelto, simplemente no se hayan interpuesto, se haya desistido de estos e incluso se pudo haber renunciado a los mismos; la firmeza de los actos administrativos en el Decreto 01 de 1984 se encontraba regulada en el artículo 62, dicha norma prácticamente señalaba lo mismo que contempla la Ley 1437 de 2011 en su artículo 87.

De acuerdo a ambas los actos administrativos quedan en firme cuando suceda cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Cuando no proceda contra ellos ningún recurso.
- **SI SE HUBIEREN INTERPUESTO RECURSOS CUANDO ESTOS SE HUBIEREN DECIDIDO.**
- Cuando no se interpongan los recursos o se haya desistido de ellos.
- Cuando se renuncie expresamente a los recursos.

Saber a partir de cuando se encuentra firme un acto administrativo es de vital importancia para que este pueda ser ejecutado pues es a partir de dicha firmeza que la ejecución puede surtirse, antes no, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual señala;

*“ Salvo disposición legal en contrario, los actos en firme serán suficientes para que las autoridades, por sí mismas, puedan ejecutarlos de Inmediato. En consecuencia, su ejecución material procederá sin mediación de otra autoridad. Para tal efecto podrá requerirse, si fuere necesario, el apoyo o la colaboración de la Policía Nacional”* (Negrilla y Cursiva fuera del texto).

Es así como debe entenderse que la Ley condiciona los efectos de una decisión que pone fin a un trámite administrativo, como lo es el acto administrativo que decide el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución que para el caso que nos ocupa era aquella que había decidido sobre la certificación del Municipio para la vigencia 2012, COMO QUIERA QUE NO SE HABÍA DECIDIDO EL RECURSO DE REPOCISION INTERPUESTO, EL ACTO ADMINISTRATIVO NO SE ENCONTRABA EN FIRME, CONSECUENCIA DE ELLO EL MUNICIPIO AUN NO HABIA SIDO DESCERTIFICADO, ASI LAS COSAS LA COMPETENCIA PARA AGOTAR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 6° DE LA LEY 147 DE 1994, ESTABA RADICADA EN EL ALCALDE MUNICIPAL DE CAPITANEJO Y EL PROCEDIMIENTO ADELANTADO NO VULNERO NORMATIVIDAD ALGUNA.

Pensar que el Municipio estaba descertificado cuando aún no se había decidido sobre el RECURSO DE REPOSICIÓN, interpuesto así fuera a través de una figura excepcional como es la Acción de Tutela, sería una violación flagrante al Debido Proceso, pues es un hecho cierto e indiscutible que para las dos fechas 22 de Mayo y 1 de Septiembre de 2014, la decisión sobre la descertificación del Municipio para la vigencia 2012, no estaba en firme. La Superintendencia, consecuencia de La orden del Juez, había expedido unos actos administrativos que gozaban de presunción de legalidad y estaban vigentes en los cuales se indicaba que iba a resolver el recurso presentado y nos encontrábamos a la espera de la decisión que se emitiera al respecto una vez surtida esta actuación se daba la firmeza del Acto Administrativo, situación que se dio después de los plazos establecidos; así las cosas no se puede indicar que para esos periodos el Municipio estaba descertificado porque no es cierto y informe a ello los actos expedidos por el Alcaide son legales pues la Ley le otorga la competencia para su expedición.

**C- AUNADO A LO ANTERIOR EL MUNICIPIO NO SIGUIÓ EL ORDEN DE LAS INVITACIONES ES DECIR AGOTAR PRIMERO LA INVITACIÓN DIRIGIDA A LAS EMPRESAS Y DESPUÉS LA RELACIONADA CON LA ORGANIZACIÓN QUE SE ENCARGUE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO. EN CONSECUENCIA SE TIENE COMO NO CUMPLIDO ESTE REQUISITO.**

Han sido reiterativos los pronunciamientos de la Superintendencia en este aspecto en el sentido de indicar mediante conceptos unificados que:

*“ .....Habiendo hecho claridad en relación con las modalidades de prestación Directa e indirecta de servicios públicos, nos concentramos ahora en el Procedimiento contenido en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, para la Prestación directa de servicios públicos domiciliarios por parte de los entes municipales.*

*Al respecto de lo anterior, es importante señalar que no existe otra ley o un decreto reglamentario en el cual se regule de manera precisa y para todos los servicios la forma de cumplir los numerales del artículo 6° de la Ley 142 de 1994 en esa medida, teniendo en cuenta que frente a los procedimientos de convocatoria a empresas de servicios públicos para que se ofrezcan a prestar el servicio y a otros municipios, departamentos, nación y otras entidades publicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que los preste, el artículo 6° de la Ley 142 de 1994, no señala ninguna restricción frente al desarrollo de los mismos, debe concluirse que los municipios pueden desarrollar las invitaciones establecidas en los numerales 6.1 y 6.2 descritos DE MANERA SECUENCIAL O DE MANERA CONJUNTA DADO QUE, EN AMBOS CASOS, EL OBJETIVO DE LA NORMA SE CUMPLE A CABALIDAD .....”(Negrilla, Cursiva y Mayúscula fuere de Texto).*

Situación jurídica que fue observada y aplicada por el Municipio, así se desprende de lo indicado en la parte resolutive de la Resolución No. 087 del Mayo 22 de 2014, cuando en su artículo segundo expresa en su tenor literal.

**"ARTÍCULO SEGUNDO: Dentro de la presente invitación que se autoriza iniciar por la presente resolución se desarrollará de manera secuencial y conjunta la invitación establecida en sus numerales 6.1. y 6.2. de la ley 142 de 1994, dado que en ambos casos el objetivo de la norma se cumple a cabalidad"** (Negrilla, Cursiva fuera de Texto).

No puede descertificarse un Municipio, aduciendo esta razón que no está soportada en ningún precepto ni constitucional, ni legal, máxime cuando la misma Superintendencia en forma reiterativa y permanente se ha pronunciado de manera contraria al indicar que las invitaciones se pueden realizar de manera secuencial o de manera conjunta, es decir que el Ente Territorial podía optar por una de las dos alternativas siendo las dos legales y tiene sentido que así sea por cuanto el hecho de que se realicen de manera conjunta como lo hizo el Municipio de Capitanejo no contraria el Ordenamiento Jurídico y cumple a cabalidad el objetivo de la norma.

La misma Superintendencia en los Conceptos emitidos indica que no existe ninguna restricción frente al desarrollo de los mismos lo que le permite concluir que ante cualquiera de las opciones que sea elegida se cumple el propósito establecido en la Ley lo cuál desvirtúa de manera tajante el argumento aducido para descertificar el Municipio.

Por ultimo y en razón a la referencia que hizo la Superintendencia del Decreto 0133 del 16 de Agosto de 2007, manifestando que se invitó a las personas publicas y privadas para organizar una empresa de servicios públicos, agregando que la invitación no se dirigió a las personas que ordena la citada Ley en el numeral 6.2 del artículo 6 de la Ley 142, igualmente aludiendo al hecho de que se incumplió este requisito en el proceso de certificación de la vigencia 2012, considero pertinente referirme a los argumentos que en ese momento procesal se omitieron sin que por parte de la Superintendencia existiera pronunciamiento alguno en razón a que consideró que el recurso había sido presentado extemporáneamente, en ese entonces los argumentos jurídicos esbozados por el Municipio fueron los siguientes:

Para efectos de dar cumplimiento a esta obligación la Primera Autoridad Administrativa para la época de los hechos expidió el Decreto 0133 del 16 Agosto del 2007, en los siguientes términos:

**D.- DECRETO No. 0133 DEL 16 DE AGOSTO DE 2007, POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE CURSAR INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO U ORGANIZAR UNA EMPRESA PARA QUE LOS PRESTE EN EL MUNICIPIO.**

Sobre el tramite legal relacionado con la invitación 2, el Numeral 6.2 la Superintendencia correspondiente a la Resolución SSPD 2014010008405 del 27-03-2014, realiza reparo jurídico por considerar que la invitación no se dirigió a las personas que ordena la ley específicamente en el numeral 6,2 del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, por cuanto según el Ente de Control se omitio dirigirla a otros Municipios, al Departamento del cual hace parte el Ente Territorial y a la Nación conforme al reproche jurídico formulado por la Superintendencia respetuosamente otorgue las siguientes explicaciones de orden legal, tendientes a desvirtuar jurídicamente dichas observaciones así:

En el Decreto No. 0133 de Agosto 16 de 2007, en su parte resolutive específicamente en su Artículo Primero, estipula en su tenor literal

**INVITAR PUBLICAMENTE A TODAS LAS PERSONAS PUBLICAS O PRIVADAS QUE QUIERAN ORGANIZAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO PARA DESARROLLAR EN EL MUNICIPIO LAS POLITICAS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ESTOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER".**

**LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LOS DEMÁS MUNICIPIOS SON PERSONAS PÚBLICAS**, luego si la invitación hace alusión a Personas Publicas incluye a la Nación, al Departamento y a los Municipios, el hecho de que no los nombrara expresamente no quiere decir que los hubiese excluido y conforme a ello considere que la invitación se había efectuado acorde con los parámetros legales establecidos.

Para corroborar lo expuesto anteriormente considere procedente hacer alusión a la Sentencia C- 1096 01 de Sala Plena de la Corte Constitucional, siendo Magistrado Ponente. JAIME CORDOBA TRIVIÑO, que sobre el tema que nos ocupa dijo:

(.....)" 2. De acuerdo con el artículo 1° de la Constitución Política el Estado en Colombia se organiza en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales. En aplicación del concepto de descentralización a que hace referencia este artículo, el estado en Colombia se organiza en dos niveles, el nacional y el territorial, y, por lo tanto, la organización política del Estado colombiano comprende la Nación y las entidades territoriales.

**EN ESTAS CONDICIONES, LA NACIÓN, LOS DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS SON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO.**

4. La personalidad jurídica corresponde a la calidad de ser sujeto de derecho y de obligaciones, y se pregona, por principio, de toda entidad pública.

- DE OTRO LADO, NO EXISTE DUDA EN QUE LAS ENTIDADES TERRITORIALES Y LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS SON PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO, EL HECHO LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA NO SEÑALE EXPRESAMENTE EN NINGUNO DE SUS ARTÍCULOS QUE LAS ENTIDADES TERRITORIALES CUENTEN CON SU PROPIA PERSONALIDAD JURÍDICA NI QUE TAMPOCO HAGA MENCIÓN EN SU ARTICULADO A LAS ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS, NO SIGNIFICA QUE NO SEAN PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. (Negrilla, Cursiva y Mayúscula fuera de Texto).

Fijese que la Corte Constitucional en Sala Plena en la Sentencia referida determina de manera clara y concreta que **LA NACIÓN, EL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS SON PERSONAS PÚBLICAS**, pero además establece que el hecho de que la Constitución Política, NO SEÑALE EXPRESAMENTE en ninguno de sus artículos que las Entidades Territoriales cuenten con su propia personalidad jurídica, ni que tampoco haga mención en su articulado a las asociaciones de municipios, **NO SIGNIFICA QUE NO SEAN PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO**, es decir el pronunciamiento de la Corte Constitucional en Sala Plena, es análogo al manifestado por el suscrito en el sentido de que no haber señalado expresamente en la invitación a la Nación, al Departamento y a los otros Municipios, no significa que la invitación no haya sido regida de conforme a la Ley, pues en la misma se hizo alusión a Personas Públicas y Privadas tal y como lo indica el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 conforme a ello las incluye plenamente, consecuentemente el procedimiento considerado se ajustaba a la norma, invalidar invitación porque expresamente no los nombró considere que era hilar demasiado fino respecto del alcance de la norma y así era corroborado por la Corte en el pronunciamiento realizado referido precedentemente.

Igualmente en esa etapa procesal se comunicó a la Superintendencia.

De la misma forma se hace necesario comunicar al Ente de Control que el Proceso de Invitación fue adelantado mediante Licitación Pública, por lo cual anexo al presente escrito los pantallazos del detalle del Proceso, publicaciones todas ellas realizadas a través de SECOP, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el Portal Único de Contratación se constituye como la Fase informativa del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

De acuerdo con la ley el SECOP, es un Sistema Electrónico que permite la consulta de información sobre los Procesos contractuales que gestionan, tanto las Entidades del Estado sujetas al Régimen de Contratación establecido en el Estatuto General de Contratación, como las que voluntariamente coadyuvan a la difusión de la actividad contractual. El principal objetivo del SECOP, es promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en la publicación por internet de las adquisiciones públicas para el beneficio de empresarios, organismos públicos y de la ciudadanía en general, así como mejorar las formas de acceso a la información respecto de lo que compra y contrata el Estado, con el consiguiente impacto económico que eso genera en la pequeña, mediana y grande empresa, en los niveles locales o internacionales.

Además la invitación como se comunicó anteriormente en desarrollo mediante la modalidad de Licitación Pública, proceso mediante el cual la Entidad convoca de forma abierta y publica en igualdad de oportunidades para que se presenten ofertas y se seleccione entre ellas la más favorable a sus intereses.

Con lo expuesto quedaba demostrada la transparencia y la publicidad que el Municipio otorgó a la invitación 2 numeral 6.2, es decir todas las personas públicas o privadas que estuviesen interesados en participar ya fuese a nivel Nacional, Departamental o Municipal, tuvieron acceso a la información, por la difusión que se dio a través de las Emisoras Regionales y del SECOP.

Así las cosas considere y considero respetuosamente que el Municipio de Capitanejo a mi cargo ha cumplido todas y cada una de las obligaciones que por Ley le competen para ser certificados para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, de Agua Potable y Saneamiento Básico, SGP-APSB.

Ahora bien en cuanto hace referencia específica al artículo 6 que finalmente fue el objeto de reparo jurídico y sobre el cual se soportaba la descertificación del Municipio es válido afirmar que de la revisión detallada de las dos invitaciones realizadas se puede afirmar que con tan solo una de ellas se estaba dando cabal cumplimiento a los numerales 6.1 y 6.2, me explico la invitación 1 a las personas que pueden prestar servicios públicos, contemplado en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, complementario del artículo 6 ibidem, si la norma dice que personas pueden prestar los servicios públicos y a ellas fue dirigida la invitación se concluye que están incluidas todas las que pueden prestarlos servicios porque la misma Ley lo establece.

En cuanto a la segunda invitación al estar dirigida la misma a Personas Públicas y Privadas, igualmente las incluye a todas luego también se puede afirmar que con esta última invitación se estaría dando cumplimiento al artículo 6, pensar en realizar una nueva invitación, reitero sería una interpretación exagerada y minuciosa del artículo que no concuerda con el contenido, ni el alcance del mismo.

Agregar a su despacho que la situación presentada en el proceso de certificación correspondiente a la vigencia 2012, generó una inseguridad jurídica debido a los pronunciamientos realizados por la Superintendencia, por las siguientes razones:

En la vigencia anterior la Superintendencia Certificó al Municipio de Capitanejo, mediante el Acto Administrativo correspondiente a la Resolución No. SSPD 20124010035975 del 9-11-2012, en los siguientes términos:

**"Que para el cumplimiento de los criterios por parte de los municipios prestadores directos de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo previstos en el artículo 4° del Decreto 1629 de 2011, se verificó en el Sistema Único de Información, SUI, los reportes de los siguientes formatos y formularios de la vigencia 2011: "DOCUMENTO DE INVITACION PUBLICA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO A PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS (NUMERAL 6.1)", "DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN DE INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO A PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS (NUMERAL 6.1)", "CONSTANCIA DE NO PRESENTACIÓN DE MANIFESTACIONES DE INTERÉS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO (NUMERAL 6.1)", "DOCUMENTO DE INVITACIÓN PÚBLICA A CONFORMAR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL SERVICIO (NUMERAL 6.2)", "DOCUMENTO DE PUBLICACION DE LA INVITACIÓN PÚBLICA A CONFORMAR EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA EL SERVICIO (NUMERAL 6.2)" Y "CONSTANCIA DEL ALCALDE SOBRE NO RECEPCIÓN DE RESPUESTA ADECUADA PARA CREAR EMPRESA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO (NUMERAL 6.2)'....."**

Que revisado el registro único de prestadores RUPS se observó que los municipios que a continuación se relacionan fueron prestadores directos del servicio público domiciliarios Acueducto, Alcantarillado o Aseo al 31 de diciembre de 2011. En consecuencia, para obtener la certificación debieron acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos los artículos 2° y 4° del Decreto 1629 de 2012. Que una vez consultado el Sistema Único de Información, SUI, se pudo constatar que las entidades territoriales, que a continuación se relacionan son de categoría 4, 5 y 6 y acreditaron el cumplimiento de los criterios que se indican en el siguiente cuadro, previstos en los artículos 2° y 4° del Decreto 1629 de 2012, así:" (Negrita y cursiva Mayúscula fuera de texto).

Conforme a los considerandos emitidos dentro del cual se encuentra el citado precedente la Superintendencia en el Artículo Primero del acto administrativo referido resolvió:

**ARTICULO PRIMERO; CERTIFICAR: A los 193 Entidades Territoriales que se relacionan a continuación en relación con la administración de los recursos del sistema general de participaciones en desarrollo de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 y 1629 de 2012. (Negrita y Cursiva fuera de Texto).**

En la relación aducida correspondiente a las 193 Entidades Territoriales se encuentra el Municipio de Capitanejo, Santander.

Conforme a ello existen dos actos administrativos relacionados la certificación para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones de Agua Potable y Saneamiento Básico, SGP-APSB, así:

**La Resolución No. SSPD 20124010035975 DEL 9 -11-2012** Que indica que el Municipio de Capitanejo cumplió el requisito establecido en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, numerales 6.1 y 6.2 y demás requisitos exigidos y conforme a ello el municipio de Capitanejo es certificado.

**La Resolución No. SSPD 20144010008405 DEL 27 -03-2014** Que indica que no cumple a cabalidad el requisito del artículo 6 incluso a pesar de cumplir los demás requisitos el Municipio en DESCERTIFICADO.

En tal sentido deberá tenerse en cuenta que el requisito correspondiente al artículo 6 de la Ley 142 de 1994, es uno solo y su cumplimiento se da o no se da, es decir no varía anualmente, así las cosas no es viable jurídicamente manifestar que se cumple con el mismo en una vigencia y al siguiente año que no se cumple.

*Igualmente es pertinente indicar que si bien es cierto la naturaleza de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la vigilancia de los Servicios Públicos Domiciliarios, también su función debe corresponder a un proceso de apoyo que busque primordialmente la satisfacción de los usuarios que en últimas es su fin último y así se entiende cuando se establece la visión de la misma al indicar que corresponde a vigilar y a controlar la Prestación de los Servicios Públicos, y a proteger la competencia y los derechos de los usuarios, para el caso específico de Capitanejo, a pesar de no contar con los recursos suficientes el Municipio ha venido cumpliendo con esta obligación de orden legal.*

*Señor Superintendente para el caso concreto que nos ocupa, respetuosamente considero que el despacho a su cargo hizo un estudio general sin tomar en cuenta las circunstancias de orden legal en las cuales se encontraba el Municipio y las mismas no fueron tenidas en cuenta pues de haber así el resultado hubiese sido diferente no se puede hacer alusión a que el Municipio estaba descertificado porque para esa fecha tal situación no se había presentado consecuentemente el suscrito sí era competente para desarrollar el agotamiento del artículo 6 de la Ley 142 de 1994, ahora bien es claro igualmente y así lo ha indicado de manera reiterada el Organismo de Control que las invitaciones podían ser realizadas conjuntamente y ello no afectaba el proceso, así las cosas están desvirtuados los dos argumentos aducidos por su despacho para descertificar al Municipio, considerando que la Resolución emitida no tiene soporte legal que le permita tomar tal decisión y así respetuosamente solicito se sirva declararlo.*

*Deberá tenerse en cuenta igualmente que ya es la tercera vez que el Municipio agota el procedimiento establecido en el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, considerando que tanto el desarrollado en la vigencia 2007, como adelantado en la vigencia 2014 están ajustados a la norma, tal aseveración esta sustentada en argumentos de orden constitucional, legal y jurisprudencia, conforme a ello agradezco a su Despacho realizar un estudio pormenorizado respecto de las decisiones adoptadas en referencia a los procesos que ha adelantado el Municipio de Capitanejo, para agotar este procedimiento.*

*Considero son suficientes los argumentos expresados para formular la siguiente*

#### **PETICION**

*Con base en las consideraciones precedentemente citadas, de la manera más respetuosa solicito en mi condición de Primera Autoridad Administrativa del Municipio de Capitanejo, Santander, se revoque integralmente la Resolución No. SSPD 20144010052575 del 25-11 del 2014, conforme a ello se CERTIFIQUE al Municipio de Capitanejo, Santander, para la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones, de Agua Potable y Saneamiento Básico SGP - APSB."*

#### **3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.**

Con el documento radicado con el No. SSPD 20155290005412, del 6 de enero de 2015, por medio del cual se sustentó el recurso de reposición, se allegaron las siguientes pruebas:

3.3.1. Notificación personal del 23 de julio del 2014, del Señor Isidoro Mogollón Blanco, de la Resolución No. SSPD 20144010032875.

3.3.2. Resolución No. SSPD 20144010032875, del 22 de julio del 2014.

3.3.3. Oficio No. SSPD 20144010537831, del 1 de septiembre del 2014, remitido por la SSPD al señor alcalde de Capitanejo.

Los anteriores documentos, en su valor integral, se anexan al expediente.

3.3.4. De igual manera el señor alcalde de CAPITANEJO, solicita se tengan en cuenta dentro del presente asunto la Resolución No. SSPD 20124010035975, del 19 de noviembre de 2012 y el proceso de invitación adelantado y reportado por el municipio.

#### **IV. ANÁLISIS DE FONDO**

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

##### **4.1. De la firmeza de la Resolución No. SSPD 20144010008405, del 27 de marzo del 2014**

Manifiesta el recurrente que para la fecha en que se efectuó la invitación pública del 6.1, y para la fecha límite de cargue es decir 22 de mayo y 1 de septiembre de 2014, respectivamente, el municipio de Capitanejo no estaba descertificado, en razón a la tutela interpuesta por el ente territorial y por cuanto el recurso interpuesto en contra de la decisión en comento no se había resuelto, en este orden de ideas el

señor alcalde municipal argumenta que la competencia para agotar el artículo 6° se hallaba en él y no en la Gobernación de Santander.

Esta Superintendencia considera necesario iniciar el análisis de los argumentos del impugnante, efectuando una recapitulación de lo sucedido en el proceso de certificación del municipio de Capitanejo, del departamento Santander, atinente a la vigencia 2012, como quiera que no fue un tema pacífico pero que a la postre una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puso fin al proceso de la certificación del ente territorial de año 2012, y cuyo resultado determinó el requisito incumplido que se debía valorar en la vigencia 2013 y por el cual el ente nuevamente se descertificó.

El día 3 de abril de 2014, fue puesta en correo certificado, la citación No. SSPD 20144010172011, del 27 de marzo de 2014, dirigida al alcalde municipal de Capitanejo, del departamento de Santander, para que compareciera a esta superintendencia a efectos de notificarle personalmente la Resolución No. 20144010008405, del 27 de marzo de 2014, que decide descertificar al municipio en relación con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, sin embargo, en razón a su no comparecencia, con el oficio número SSPD 20144010200511, se remitió aviso contentivo de una copia del acto administrativo señalado, el cual según el certificado de la empresa de Servicios Postales Nacionales 4-72 fue entregado el día 21 de abril de 2014, en la Alcaldía Municipal de Capitanejo.

En este entendido, se tiene como efectuada la notificación por aviso el día 22 de abril de 2014, por consiguiente los diez (10) días hábiles en los cuales subsistía la oportunidad de interponer el recurso de reposición expiraron el día 7 de mayo de 2014, por tanto el acto administrativo cobró firmeza el 8 de mayo del 2014.

No obstante lo anterior, el día 30 de abril, el señor alcalde de Capitanejo, se notificó personalmente de la Resolución SSPD No. 20144010008405, del 27 de marzo de 2014, y mediante documento radicado en esta entidad bajo el número SSPD 20145290231832, del 8 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición en contra del acto administrativo notificado.

Que mediante Resolución SSPD No. 20144010018065, del 29 de mayo de 2014, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 del C.P.A.C.A., el recurso interpuesto fue rechazado por extemporáneo, teniendo en cuenta que al haberse surtido primero en el tiempo la notificación por aviso, ésta era la que prevalecía.

Ahora bien, en respuesta a esta decisión el ente territorial interpuso tutela por considerar que se violaba su derecho al debido proceso, contradicción y defensa, acción frente a la cual el 17 de julio del 2014, el Juzgado 21 Administrativo de esta ciudad, ordenó a la SSPD dejar sin efecto la actuación surtida para el municipio de Capitanejo dentro del proceso de certificación de la vigencia 2012, a partir de la notificación personal de la Resolución No. SSPD 20144010008405, del 27 de marzo de 2014, orden que fue acatada por esta entidad, razón por la cual el día 23 de julio notificó nuevamente al señor alcalde de la Resolución No. SSPD 20144010008405, frente a la cual nuevamente interpuso recurso de reposición el día 6 de agosto del 2014.

Si bien la orden del Juzgado 21 Administrativo fue acatada por ser imperativo su cumplimiento inmediato, también fue impugnada por parte de la SSPD, en este orden de ideas el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, el 5 de septiembre de 2014, como respuesta a la contradicción en comento revocó la sentencia de tutela proferida por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Bogotá, y en su lugar declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor alcalde del municipio de Capitanejo.

En consecuencia, las actuaciones surtidas en el proceso de certificación de la vigencia 2012 para el municipio de Capitanejo, debían volver a su estado original, esto es, al estado en que se encontraban antes del fallo de primera instancia proveydo por el Juzgado 21 Administrativo de Bogotá.

Así las cosas, se tiene que la firmeza establecida en una primera oportunidad es la correcta, es decir que la decisión de descertificación del municipio de Capitanejo de la vigencia 2012 cobró firmeza el 8 de mayo de 2014, y por lo tanto el recurso radicado bajo el No. SSPD 20145290231832 del 8 de mayo fue extemporáneo ya que la oportunidad que le asistía al ente territorial de interponerlo subsistió hasta el 7 de ese mes; como corolario de lo anterior y dado que lo accesorio sigue la suerte de lo principal la impugnación con radicado SSPD No. 20145290427562, del 6 de agosto de 2014, no se resolvió por los fundamentos aquí expuestos y contenidos en la Resolución No. 20144010040895 del 18 de septiembre de 2014.

Por tanto en este caso, y conforme al artículo 87 del C.P.A.C.A., la firmeza del acto administrativo se dió conforme al numeral 3° el cual establece que la misma se adquiere: *"Desde el día siguiente al del*

vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron interpuestos (...)", lo anterior como quiera que dentro del término legal el municipio no interpuso recurso de reposición.

Es importante señalar que la observancia de los términos procesales es obligatoria para los sujetos inmersos en el proceso que nos ocupa. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha manifestado lo siguiente<sup>1</sup>:

*"Pues bien, nótese cómo las leyes de estirpe procesal son de orden público y en consecuencia de obligatoria observancia. Sus dictados entonces, son ajenos al querer de los individuos: particulares y funcionarios llamados a aplicarlas. (...) En efecto, ha de repetirse, que la condición de normas taxativas que caracteriza las leyes que rigen los procedimientos es de inexorable acatamiento, máxime cuando estas normas constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del sistema normativo." y concluye señalando: "En este orden, los términos procesales se hacen tan imperativos que su cumplimiento, es una manifestación de uno de los principios sobre los cuales reposa el derecho procesal. Se trata del principio de la preclusión o de la eventualidad, el cual consiste en la clausura de las actividades que pueden llevarse a cabo dentro de cada etapa del proceso.*

*(...)Lo anterior, por cuanto el señalamiento de términos judiciales con un alcance perentorio, no sólo preserva el principio de preclusión o eventualidad sino que, también, permite, en relación con las partes, asegurar la vigencia de los principios constitucionales de igualdad procesal y seguridad jurídica, ya que al imponerles a éstos la obligación de realizar los actos procesales en un determinado momento, so pena de que precluya su oportunidad, a más de garantizar una debida contradicción, a su vez, permite otorgar certeza sobre el momento en que se consolidará una situación jurídica."*

En conclusión y contrario a lo esgrimido por el recurrente la decisión de descertificación adquirió firmeza el día 8 de mayo de 2014, y desde ese día el ente territorial perdió la administración de los recursos del GP-APSB y la competencia para asegurar la prestación de los servicios.

#### **4.2. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito relacionado con el reporte al SUI del agotamiento del procedimiento previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994.**

El impugnante señala que al momento de agotar el artículo 6° y a la fecha límite de cargue el municipio era competente para el efecto, por cuanto el acto administrativo que descertificaba al ente territorial no estaba en firme, y que considerar que no era competente y descertificar al municipio por ese evento constituye una violación flagrante al debido proceso, en ese mismo sentido argumenta que el acto administrativo no había adquirido firmeza por cuanto el recurso interpuesto no había sido resuelto.

En cuanto al orden de las invitaciones, alega que según conceptos de esta entidad el desarrollo de este procedimiento no presenta restricciones, de tal suerte que el agotamiento efectuado por el ente en el entendido de realizar primero el numeral 6.2 y luego el 6.1 se desvirtúan con este argumento.

En lo atinente a los sujetos a los cuales se dirigió la invitación del numeral 6.2 en el año 2007 menciona que si bien no se incluye a la nación, al departamento y a los municipios es porque en la expresión "personas públicas" se encuentran inmersos aquellos y por tanto no se puede exigir su individualización.

Refiere también el impugnante que "de la revisión detallada de las dos invitaciones realizadas se puede afirmar que con tan solo una de ellas se estaba dando cabal cumplimiento a los numerales 6.1 y 6.2".

Finalmente aduce, que el requisito relacionado con el agotamiento del artículo 6° de la Ley 142, fue estimado como cumplido por la SSPD respecto de la vigencia 2011, sin embargo en la vigencia que se discute (2013), se dice lo contrario, por tanto según su concepción no es dable que la posición de esta entidad en cuanto al cumplimiento de este requisito varié anualmente.

Sea lo primero iniciar señalando que de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 7° del Decreto 1484 del 2014 "El municipio o distrito prestador directo que se encuentre descertificado por uno o varios de los aspectos del presente artículo, podrá obtener la certificación en la siguiente vigencia, acreditando, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 6° del presente decreto, el cumplimiento del aspecto o aspectos incumplidos, de acuerdo con los requisitos exigidos en la vigencia a certificar. Lo anterior, sin perjuicio de la verificación que se realizará cada dos años de la totalidad de los requisitos para prestadores directos."

En este orden de ideas y en concordancia con lo esgrimido en el numeral 4.1, la Resolución que descertificó al ente territorial dentro del proceso de certificación de la vigencia 2012, cuya firmeza es del 8 de mayo del 2014, se fundamentó en el incumplimiento por parte del municipio del agotamiento del artículo 6° de la Ley 142 de 1994, por esta razón en el proceso de la vigencia de 2013, además de los 4

1 Corte Constitucional. Sentencia T - 213 del 28 de febrero 2008. MP Doctor Jaime Araújo Rentería

requisitos señalados en el artículo 6° del Decreto 1484 del 2014, al municipio de Capitanejo se le debía evaluar el agotamiento del artículo 6°, tal como lo señala el parágrafo del artículo 7° del Decreto 1484 de 2014.

Ahora bien, se encontró que el municipio reportó en el SUI el Decreto No. 0133, del 16 de agosto de 2007, por medio del cual invitó a personas públicas y privadas, para organizar una empresa de servicios públicos, sin embargo esta invitación no se dirigió a las personas que ordena la ley 142 de 1994 en su numeral 6.2.

De otra parte la Resolución No. 087, del 22 de mayo de 2014, por medio de la cual invitó a prestar los servicios públicos en el municipio, fue realizada por el alcalde municipal, cuando ya no era competente para agotar dicho procedimiento.

Finalmente se verificó que el municipio no siguió el orden de las invitaciones, es decir agotar primero la invitación dirigida a las empresas de servicios públicos, y después, la invitación para organizar una empresa que se encargue de la prestación de los servicios en el municipio, motivos suficientes para estimar el incumplimiento del requisito aludido.

En lo referente al argumento del impugnante en el cual menciona que cuando el Decreto No. 0133 (invitación numeral 6.2), hace alusión a personas públicas se incluye a la Nación, al departamento y a otros municipios, es importante reiterar que esta entidad evalúa lo que la norma prescribe y el legislador en la Ley 142 se encargó de individualizar los sujetos a quienes debe ir dirigida la invitación del numeral 6.2 así: "6.2. Cuando, no habiendo empresas que se ofrecieran a prestar el servicio, y habiendo hecho los municipios invitación pública a otros municipios, al Departamento del cual hacen parte, a la Nación y a otras personas públicas o privadas para organizar una empresa de servicios públicos que lo preste (...)" (Subraya fuera del texto).

De tal suerte que las invitaciones que pretendan agotar los numerales 6.1 y 6.2 deben corresponder en sujeto y objeto a lo dispuesto por la norma, para poder tener como agotado correctamente el artículo 6° en estudio.

Respecto de este tema debe resaltarse que la Nación, los municipios y los departamentos, son personas jurídicas de derecho público a quienes la Ley les ha conferido personalidad jurídica, es decir, la calidad de ser sujeto de derecho y de obligaciones; en esta materia nótese lo señalado por la Corte Constitucional<sup>2</sup>:

*"De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 153 de 1887, "[l]a Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas o reconocidas por la ley, son personas jurídicas.*

*Dentro de ese esquema, y a la luz de la consagración del Estado Colombiano como una república unitaria pero descentralizada, se ha entendido que las entidades territoriales, así como las entidades descentralizadas por servicios, tienen su propia personería jurídica, al paso que la personalidad jurídica de la Nación cubre a las ramas del poder público, así como a los otros órganos autónomos e independientes que se han previsto por la Constitución para el cumplimiento de las demás funciones del Estado."*

Por consiguiente, al ser personas jurídicas independientes, no puede interpretarse, como lo señala el recurrente en su escrito, que al haber realizado la invitación del numeral 6.2 únicamente "a todas las personas públicas o privadas" en estas se encuentren inmersas la Nación, el departamento y los otros municipios, ya que de una lectura detenida del artículo 6, numeral 6.2, se desprende que el legislador dispuso explícitamente que no sólo "a otras personas públicas o privadas" debía invitarse para organizar una empresa de servicios públicos, sino que claramente señaló que la invitación también tenía que dirigirse a las siguientes personas públicas: otros municipios, al departamento del cual hace parte el municipio, es decir, no indicó la norma que debía invitarse a los 32 departamentos del país, sino sólo a uno, y a la Nación. Y así lo entendió esta superintendencia al analizar este requisito, en aplicación del principio general de interpretación jurídica según el cual donde la norma no distingue, no le corresponde distinguir al intérprete; por consiguiente, no es de recibo por parte de éste despacho la afirmación efectuada por el recurrente.

En cuanto a la competencia para dar cumplimiento a este requisito, es preciso traer a colación el numeral 15.4.1. del artículo 15 del Decreto 1484 del 2014, el cual establece que los departamentos deberán asegurar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en la jurisdicción de los municipios o distritos descertificados, para lo cual ejercerán atribuciones específicas entre las cuales

---

<sup>2</sup>Sentencia T-247/07

Menciona: *"Adelantar lo previsto en el artículo 6° de la Ley 142 de 1994 en caso de que no se haya agotado."*

Aunado a lo anterior y en concordancia con el numeral 4.1 de esta Resolución, en el cual se demostró que el acto administrativo que descertificó al municipio respecto de la vigencia 2012, cobró firmeza el 8 de mayo del 2014, se tiene que a partir del 9 de mayo el municipio ya no era competente para agotar el procedimiento del artículo 6°, por tanto la invitación del 22 de mayo de 2014, se realizó cuando el señor alcalde ya no tenía competencia para el efecto.

Es necesario advertir, que es claro que al dejarse vencer el término para presentar el recurso de reposición, el acto administrativo que se pretendía recurrir adquiere firmeza, aún si no se ha expedido la Resolución que rechaza el recurso de reposición, lo anterior en cumplimiento de los principios de seguridad jurídica y del debido proceso, tal como lo establece el C.P.A.C.A.

Ahora bien, en lo atinente al orden de las invitaciones es importante mencionar que el municipio de Capitanejo, no siguió el orden establecido en la ley 142 de 1994, en el entendido de dar cumplimiento primero a la invitación señalada en el numeral 6.1, para después realizar la del 6.2, por cuanto la fecha de la invitación del numeral 6.2 (16 de agosto de 2007) es anterior a la del 6.1. (22 de mayo de 2014), al respecto, la Circular Externa 01 del 23 de febrero de 2010, emitida por esta superintendencia, dispone que las invitaciones deben surtir de manera secuencial o de manera conjunta, es decir que si se realizan de forma separada debe ser primero la invitación del numeral 6.1 y una vez haya sido agotado el procedimiento para la misma se inicie el procedimiento para agotar el numeral 6.2; en caso de hacerse en forma conjunta en un solo acto administrativo, deberá quedar claro el objeto de cada una de ellas, así como los sujetos a los cuáles va dirigido.

Es expresa y coherente la Circular Externa expedida por esta entidad, al consignar que las invitaciones de no hacerse de manera conjunta deberán realizarse secuencialmente, entendida la palabra secuencia como una sucesión ordenada<sup>3</sup>, por tanto si se exige una secuencia es por que existe un orden y el mismo no puede dejarse librado al arbitrio del municipio.

Así las cosas, el artículo 6° citado, no fue agotado conforme a lo señalado por la norma, por cuanto el numeral 6.1 fue realizado sin competencia, la invitación del 6.2 no se dirigió a todos los sujetos que la norma dispone, y para finalizar el municipio no siguió el orden de las invitaciones, por tanto estas falencias no permiten considerar agotado el artículo 6°, toda vez que como se mencionó, dicho precepto contempla dos numerales los cuales deben agotarse en su integridad.

En este punto es importante recordarle al recurrente, la responsabilidad que le asiste al municipio, de dar cumplimiento a los requisitos que le correspondan y de reportar los documentos que así lo demuestren, ya que la SSPD conforme a lo dispuesto por la norma, examina lo que el ente territorial allega y si de ello no se desprende el cumplimiento de el o los requisitos evaluados, no tiene otra opción que la descertificación, lo anterior para referir que la decisión adoptada por esta entidad se halla ajustada a la ley, ya que al no cumplir el municipio con los requisitos dispuestos en el Decreto 1484 del 2014, debe asumir la consecuencia establecida, la cual consiste en privar al ente de la administración de los recursos del SPG-APSB, hasta tanto se certifique dentro de un nuevo proceso.

De otra parte y en cuanto al argumento que en el proceso de la vigencia 2011, esta entidad tuvo como cumplido el requisito atinente al artículo 6° y que respecto de la vigencia 2013 no fue así, es necesario poner de presente que los procesos referentes a la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB son completamente independientes, y por tanto la Resolución que hoy se recurre no se atiene a los resultados de procesos anteriores, adicionalmente el artículo 4° del Decreto 1629 del 2012 es sustancialmente diferente al artículo 7° del Decreto 1484 del 2014, en cuanto al cumplimiento del artículo 6°, por cuanto mientras el primero se cumplía con los documentos que demuestren que dicho procedimiento se encuentra en curso (Lo cual sucedió con la invitación del año 1995 aportada en ese momento por el municipio), el segundo dispone evaluar el cumplimiento cabal del mismo, es decir mientras el uno exigía evidenciar gestión, el segundo un resultado, así las cosas el argumento del señor alcalde no guarda consistencia por lo explicado.

A continuación se adjunta imagen del aparte de la Resolución No. SSPD 20124010035975, del 19 de noviembre del 2012, correspondiente al municipio de Capitanejo, donde se observa con claridad que el agotamiento del artículo 6° se acreditó con el trámite.

---

3 Real Academia Española (22.ª ed.). Consultado en <http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae>

SANTANDER	CAPITANEJO	REPORTE AL SUI DEL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO 6° DE LA LEY 142 DE 1994 O QUE LA MISMA SE ENCUENTRE EN CURSO	DE SUBSIDIOS.	SI
			REPORTÓ EN EL APLICATIVO INSPECTOR DEL SUI EL 03 DE JUNIO DE 2010 LA INVITACIÓN No. 19 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1995 CON LA QUE DEMUESTRA QUE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 6.1 Y 6.2 DEL ARTICULO 6 DE LA LEY 142 DE 1994 PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SE ENCUENTRA EN TRÁMITE.	


Finalmente, con respecto a la afirmación del señor alcalde según la cual con tan solo una de las invitaciones aportadas se agotan los numerales 6.1 y 6.2., es preciso insistir como se ha mencionado a lo largo de esta Resolución, en la necesidad de que cada una de las invitaciones corresponda en sujeto y objeto a lo establecido en la norma.

Ahora bien, en las invitaciones aportadas por el municipio (Adjuntas a continuación), se observa que la una invita a organizar una empresa (2007) y la otra para prestar los servicios públicos (2014), de tal manera que no es predicable que con solo una de ellas se pueda demostrar el agotamiento del procedimiento en discusión y más cuando la mismas presentan falencias como las ya señaladas.

**ARTICULO PRIMERO:** Invitar públicamente a todos las personas públicas o privadas que quieran organizar una empresa de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para desarrollar en el Municipio las políticas de Organización, Administración, Gestión y Prestación de estos Servicios Públicos Domiciliarios en el Área Urbana del Municipio de Capitanejo Santander.

**ARTÍCULO PRIMERO:** Inicie el proceso de invitación pública a empresas de servicios públicos para que presenten ofertas para la prestación de servicio públicos (numeral 6.1.

**UNIDOS POR CAPITANEJO**  
Capitanejo, Santander Cl. 5 No 5 – 48, TEL 0976600032 Ext. 106  
Mail: [alcaldia@capitanejo-santander.gov.co](mailto:alcaldia@capitanejo-santander.gov.co)



**DESPACHO DEL ALCALDE  
CAPITANEJO**

DANE: 68147      NIT: 890205119-8  
**ISIDRO MOGOLLÓN BLANCO**  
Alcalde municipal 2012-2015

Art. 6° ley 142 de 1994); y a otros municipios, al departamento, a la Nación y a otras personas públicas o privadas (numeral 6.2. Art. 6° ley 142 de 1994) para la prestación del servicio público Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de CAPITANEJO, de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley 142 de 1994.

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda, y por lo tanto el recurso formulado por el señor ISIDORO MOGOLLÓN BLANCO, como alcalde municipal de CAPITANEJO, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20144010052575, del 25 de noviembre de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de CAPITANEJO, del departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.


**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**


Dada en Bogotá, D. C.



**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**  
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

Proyectó: Vanessa Benavides Quevedo- Contratista Grupo de Certificaciones e Información 

Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información 

Aprobó: Irina Margarita Amín David - Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información 

Expediente: 20094016849880943A